



COLOMBIA

Cúcuta : la prensa colombiana al cruce de los peligros

Abril 2005

Investigación : Christine Renaudat, Vincent Taillefumier y
Johan Schmidt

Reporteros sin fronteras

Secretaría Internacional

Despacho Americas

5, rue Geoffroy Marie

75009 Paris-France

Tél. (33) 1 44 83 84 68

Fax (33) 1 45 23 11 51

E-mail : ameriques@rsf.org / americas@rsf.org



www.rsf.org



www.rsf.org

COLOMBIA

Cúcuta : la prensa colombiana al cruce de los peligros

Una serie de graves ataques contra periodistas en Cúcuta desde principios de 2004 motivó la visita de cuatro organizaciones a esa ciudad los días 9 y 10 de febrero.

La Fundación para la libertad de prensa (FLIP - Colombia) en representación del Proyecto Antonio Nariño, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS - Perú), International Media Support (Dinamarca) y Reporteros sin fronteras (Suecia y Francia) quisieron conocer la situación de esta ciudad que en el 2004 fue uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en Colombia.

De 38 casos de amenazas contra periodistas reportados en Colombia durante el 2004, 8 sucedieron en Cúcuta. Estos ataques tuvieron como consecuencia el exilio de varios periodistas. La tensión en la zona llegó a su punto más álgido el 11 de enero de 2005 con el asesinato del periodista radial Julio Palacios.

Lamentablemente, esta situación que viven los periodistas en Cúcuta viene de años anteriores : en el 2002 un carro bomba estalló frente a la emisora RCN y otra bomba fue desactivada frente al diario La Opinión. En el 2003 tres periodistas de RCN Televisión fueron secuestrados por las FARC.

En esta misión a Cúcuta sus representantes entrevistaron a más de veinte periodistas de medios locales, corresponsales de medios nacionales y dueños de espacios informativos. También se reunieron con autoridades como el alcalde encargado, el secretario de gobierno del departamento del Norte de Santander, el comandante de la Policía, el segundo al mando del Ejército, la directora seccional de la Fiscalía y el director seccional del organismo de seguridad del Estado, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Adicionalmente, los integrantes de la misión también recogieron las opiniones de organizaciones sociales, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría Regional.

Cúcuta: entre grupos armados y cárteles

Cúcuta, capital del departamento fronterizo del Norte de Santander es, y ha sido por décadas, blanco de grupos armados y delincuenciales.

Buscando asegurarse el fácil acceso a Venezuela y así controlar las ganancias de los diferentes tráficos que se mueven por la zona, desde el contrabando de autos robados en la década del setenta hasta el tráfico de gasolina que es hoy ignorado por las autoridades.

Los cultivos ilegales de hoja de coca (base de la cocaína) que sumarían al menos 7 000 hectáreas en la región del Catatumbo, en el norte del departamento, también han hecho de la ciudad un paso obligado del tráfico de droga. El narcotráfico, de mano del alias El Pulpo, capo mencionado repetidamente por los habitantes, incide de manera acentuada en la vida social, económica y política de Cúcuta, generando un silencio parcial (autocensura) sobre este tema en la prensa local.

Por años, las guerrillas de extrema izquierda del Ejército Popular de Liberación (EPL) y, sobre todo, las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantuvieron una fuerte presencia en la región. El grupo de extrema derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entró a disputar este control a partir de 1999. Su violento ingreso en la región, marcado por las masacres de Tibú y la Gabarra, desató una ola de asesinatos de civiles sin precedentes en la zona.

La guerra entre los grupos irregulares se desató entre la población civil, acusada de auxiliar a uno u otro de los bandos. En el 2002, con más de 1,000 asesinatos, Cúcuta llegó a ser la ciudad más violenta de Colombia por su alta tasa de homicidios en relación con su número de habitantes. Hoy, esta tasa bajó aproximadamente un 60%, pero la población sigue siendo blanco de asesinatos selectivos y la tasa de homicidios supera al promedio nacional.

Aunque todavía se registra en Cúcuta la presencia del ELN, quien ha centrado sus acciones en ataques puntuales, las AUC han afianzado su control en la ciudad, principalmente en los barrios marginales donde vive la mitad de los 725,000 habitantes.

También lograron infiltrar parte de la administración local. En marzo de 2004 se libró un orden de captura contra Ana María Flórez Silva, ex directora seccional de la Fiscalía, quien está prófuga después de que se revelaran sus nexos con grupos paramilitares. En junio



www.rsf.org

de 2004, el alcalde Ramiro Suárez Corso fue arrestado y acusado por posibles vínculos con esa organización armada. Aunque aún no se ha resuelto su situación jurídica, actualmente está detenido en esa ciudad.

A pesar de la desmovilización de los 1,425 miembros del Bloque Catatumbo de las AUC, que entregaron oficialmente sus armas el 10 de diciembre de 2004, y del cese al fuego promulgado por ese grupo, organizaciones sociales han denunciado asesinatos posteriores a esa fecha a manos del grupo armado. Se dice que 400 de estos desmovilizados están asentados en Cúcuta a la espera de su reinserción a la vida civil. Además, hay indicios de la existencia de vínculos entre las AUC y los narcotraficantes de la región.

Este panorama dificulta el ejercicio periodístico de los medios locales. Al menos ocho emisoras, dos canales de televisión, una revista y el único diario trabajan bajo presión.

Un año negro para la prensa cucuteña

El 2005 comenzó con un duro golpe a la libertad de prensa en Cúcuta. El 11 de enero, Julio H. Palacios Sánchez, gerente de la emisora Radio Lemas y director de la Radio Revista «El Viento» fue asesinado. Dos sicarios lo interceptaron rumbo a su trabajo y le dispararon en repetidas ocasiones. Varias personas concuerdan en que Palacios era polémico y crítico hacia diversas personas de la vida pública en Cúcuta. Otras fuentes afirmaron que en los 20 años de su trayectoria como reportero, en más de una oportunidad había sido denunciado por injuria y calumnia.

Los móviles del crimen no son claros aún, pero sí lo es que el asesinato de Palacios generó un clima de zozobra y temor entre los periodistas cucuteños que venía gestándose desde comienzos de 2004. Con la muerte de Palacios se revivieron las amenazas contra el periodista Jorge Corredor, a quien le hicieron llegar un mensaje de que él sería el siguiente en ser asesinado. Por su parte, el periodista del diario La Opinión, Antonio Colmenares, decidió salir de Cúcuta sin previo aviso, por razones que aún no son claras. Adicionalmente, durante la misión, otros periodistas manifestaron sentirse intimidados.

Pero esta situación viene de antes. Durante el 2004, las diferentes organizaciones de libertad de prensa registraron ocho periodistas y un

medio de comunicación amenazados. A finales de febrero de 2004 Cristian Herrera Nariño, redactor del diario La Opinión, fue víctima de llamadas amenazantes y obstrucciones a su trabajo periodístico. El 22 de abril, Jorge Corredor sufrió un atentado cuando un sicario entró a su casa y disparó, asesinando a su hijastra. El 7 de mayo el periodista Jesús Montes supo que ese mismo día iba a ser asesinado. Todos estos periodistas tuvieron que salir de Cúcuta. Hernán Sepúlveda, compañero de Jesús Montes también salió. El 10 de junio a los periodistas de RCN Radio les llegó un panfleto a la sede de la emisora y dos semanas más tarde, el equipo del noticiero radial Net Noticias, recibió una llamada advirtiéndoles que se callaran. Ellos, y otros de estos periodistas, venían denunciando hechos de corrupción en la administración local.

Los casos mencionados recibieron todos alguna clase de protección. A los periodistas de Net Noticias se les asignó un esquema de seguridad colectivo que incluye un vehículo, un conductor y dos escoltas del DAS. A cada uno de los reporteros de RCN Radio los acompaña un escolta de la policía. El comandante de esa institución, coronel José Humberto Henao, dijo a las organizaciones que los escoltas no son permanentes y que los rotan entre los reporteros que los requieran.

Hasta la fecha, el Ministerio del Interior ha otorgado los mecanismos de protección prestados por el DAS y por la Policía, que resultan fundamentales para garantizar la seguridad de los periodistas. Sin embargo, preocupa que no se han tomado medidas preventivas y estructurales para solucionar la situación de los reporteros.

Afirmaciones como las del alcalde encargado, Gustavo Villasmil, quien señaló que nunca le habían reportado atentados contra la prensa, dejan entrever que no hay una conciencia por parte de algunas autoridades sobre la situación de riesgo generalizada de los reporteros de esa ciudad. Otros funcionarios aseguran que los ataques son hechos aislados y los relacionan con la situación personal de cada periodista amenazado. El comandante de la policía señaló a los representantes de la misión que el asesinato de Palacios había sido “el punto negro en el pañuelo blanco”. La misión encontró que el pañuelo no es tan blanco y que Palacios no es el único punto negro.

También son preocupantes los riesgos de impunidad que pesan sobre los casos de ataques. Actualmente, la Fiscalía de Cúcuta está



www.rsf.org

investigando 6 de los 8 casos de amenazas registrados por las organizaciones. Todos los procesos, incluso los iniciados a comienzos de 2004, se encuentran en etapa preliminar; es decir, que no hay ninguna persona sindicada ni capturada. Por otra parte, solamente el caso del asesinato del periodista Palacios está a cargo de un fiscal de la unidad de derechos humanos. Los otros casos los llevan fiscales no especializados en el tema. En el atentado contra Jorge Corredor, la Fiscalía ha querido enviar el caso a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá, pero se necesita una solicitud desde la capital que aún no ha llegado. La directora seccional de Fiscalía dijo a la misión que “hacen el trabajo con los recursos que tienen”.

La Procuraduría Regional, órgano de control encargado de velar que los procesos penales se lleven conforme a la ley, sólo está haciendo seguimiento al caso de Julio Palacios.

Consecuencias : una prensa “con pies de plomo”

Además de la muerte y los exilios provocados por los atentados contra la libertad de prensa en la ciudad de Cúcuta, las continuas amenazas y el alto grado de impunidad han creado entre los periodistas un clima de zozobra y precaución.

Varios de ellos, aun sin ser amenazados, se sienten presionados y para evitar algún tipo de represalia prefieren abstenerse de publicar información pertinente y de realizar un análisis de los acontecimientos. “Trabajamos con pies de plomo”, repitieron varios entrevistados.

Su temor a verse atacados o amenazados por sectores legales e ilegales los obliga a informar remitiéndose únicamente a las fuentes, en la mayoría de los casos oficiales, citándolas sin llevar a cabo la investigación periodística correspondiente. Esto sin duda perjudica la calidad de la información y el derecho de los ciudadanos a ser informados.

La mayor parte de los periodistas entrevistados concuerdan en que ciertos temas, aunque son de conocimiento público, son vedados o tratados de manera muy superficial. Los temas de narcotráfico, corrupción y contrabando de gasolina, que diariamente afectan la vida de los habitantes de la capital del Norte de Santander, son de los más delicados y de los que menos se informa.

Concuerdan también los periodistas entrevis-

tados en que, principalmente, no se atreven a evocar ni investigar los vínculos que pueden tener las autoridades locales con estos cárteles por dos razones: primero, el temor a recibir amenazas o sufrir atentados. Segundo, temen que las autoridades locales, encargadas de repartir el mayor volumen de pauta a los medios de comunicación, les quiten lo que muchas veces es su único medio de sustento.

El riesgo del clientelismo mediático

En Colombia, la publicidad en medios proveniente de entidades públicas y es la principal fuente de ingresos para muchos medios locales. Esa dependencia, sumada al uso indebido que hacen de ella algunos funcionarios públicos como instrumento de presión, es muy común en las regiones colombianas. Cúcuta no es la excepción.

Los periodistas radiales de Cúcuta confirmaron a los representantes de la misión que la mayoría de ellos tienen que buscar la pauta para financiar su espacio, lo que limita su independencia. Pero esta limitación se genera desde el momento mismo de la distribución de la publicidad, pues no hay criterios claros para su asignación por parte de las alcaldías, las gobernaciones y otros entes adscritos.

Los funcionarios señalaron que la pauta se distribuía según la ley de contratación colombiana. Pero esa ley les permite, a través de órdenes de servicio, adjudicar o suspender publicidad sin control alguno. Esto puede generar una dependencia mutua entre algunos funcionarios públicos locales y ciertos periodistas, ocasionando un peligroso clientelismo mediático. En la ciudad de Barrancabermeja esta relación tuvo como consecuencia el asesinato del periodista José Emeterio Rivas.

Conclusiones

o La misión observó que los diferentes ataques y amenazas que se han presentado en la ciudad de Cúcuta y el reciente asesinato del periodista Julio H. Palacios, han generado entre la prensa norte santandereana un estado de zozobra que limita el ejercicio periodístico.

o Así mismo, se comprobó que existen temas vedados para los periodistas y que otros son manejados con excesiva cautela para evitar amenazas.



www.rsf.org

o También se pudo observar que las autoridades locales desconocen en parte los ataques contra la libertad de prensa y, así mismo, la lentitud en las investigaciones.

o La impunidad en las investigaciones y la falta de sanciones a los agresores de la prensa, refuerzan el clima de intimidación y los incitan a seguir amenazando.

o La falta de garantías para el ejercicio periodístico y la dependencia que tienen los medios de comunicación con las autoridades locales en el tema de la pauta, reducen la libertad de prensa y vulneran el derecho a la información.

Recomendaciones

A. Autoridades civiles

Tomar conciencia y estar más alerta al riesgo que tienen los periodistas cucuteños. Planear y tomar acciones para prevenir amenazas y agresiones en contra de la prensa. Incluir este tema dentro de las mesas de negociación del gobierno con las AUC.

A la Fiscalía, Procuraduría y entes investigadores: investigar el origen de las amenazas y los atentados y hacer un seguimiento efectivo a las mismas hasta que capturen, se sancionen a los agresores y se aclaren las causas que dieron origen a las agresiones.

Al Ministerio del Interior: que garantice la protección de los periodistas que se encuentran en riesgo y adecue la logística necesaria para atender cualquier emergencia.

A la Defensoría del Pueblo: que continúe su labor de ayudar a los periodistas en riesgo y que solicite las herramientas necesarias para poder brindar esta ayuda.

A las entidades públicas locales: que establezcan criterios claros y transparentes para la distribución de la pauta publicitaria.

B. A las autoridades militares, policía y DAS

Que contribuyan en las investigaciones y lleven a que se sancione a los responsables de las amenazas y ataques en contra de la prensa.

Que garanticen la protección de los periodistas que se encuentran en riesgo y que busquen mecanismos de prevención permanentes para evitarlos.

Que recuerden que para garantizar el derecho a la información de la sociedad, es fundamental que los periodistas puedan consultar fuentes diversas, no necesariamente las oficiales.

C. A los medios de comunicación

Que se comuniquen de inmediato con las diferentes autoridades locales en el momento en el que sean víctimas de alguna amenaza o atentado.

Que apoyen y respalden a sus colegas cuando sean presionados.

A los medios y periodistas, que implementen las medidas de seguridad propuestas tanto por el Manual de Autoprotección para periodistas en el Conflicto Colombiano elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa, con el apoyo de la UNESCO, como las recomendaciones contenidas en la Carta sobre la Seguridad de Periodistas en Zonas de Conflictos y de Tensiones elaborada a iniciativa de Reporteros sin Fronteras.

Siendo el Diario La Opinión el único medio local con las armas necesarias para enfrentarse a todos los problemas de una ciudad fronteriza, se pide a los medios nacionales que respalden a sus colegas de Cúcuta investigando las temáticas de la región.

D. Grupos Armados Ilegales

Que respeten la libertad de prensa como garantía del derecho de la sociedad a estar informada. Según el Primer Protocolo adicional de las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949, los periodistas deben estar considerados como civiles y ser protegidos como tales. Su trabajo garantiza el derecho a la información de los ciudadanos y en tal sentido deben contar con garantías para ejercer su labor de manera independiente, libre y responsable, tal como lo contempla el artículo 73 de la Constitución Nacional.

E. A la sociedad cucuteña

Que apoyen y respalden a sus periodistas cuando sean amenazados o presionados y que, en todo caso, exijan recibir una información completa.